

Boletín Oficial

PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Pedro Lozano, Calle de San Pedro núm. 14, á 80 rs. al año para esta Capital, y 96 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.

PARTE OFICIAL.

PRIMERA SECCION.

MINISTERIOS.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real familia continúan sin novedad en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 403.

Los Alcaldes de los distritos, cuyos nombres se espresan á continuación, no han remitido aun á este Gobierno las listas de los sugetos que componen las Juntas municipales de Beneficencia, por cuya razon y á fin de cumplimentar un orden del Gobierno de S. M., le prevengo que si no lo ejecutan en el término de ocho dias, partirán Comisionados á recogerlas por cuenta de los Alcaldes morosos. Orense 11 de Agosto de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria.

Neg.º de Ramuin.	Cea.
Pereiro de Aguiar.	Irijo.
Peroja.	Maside.
Baños de Molgas.	Pinor.
Barrio.	Cortelle.
Lovios.	Calvos de Randin.
Muños.	Rairiz de Veiga.
Padrenda.	Sandianes.
Verea.	Sarreaus.
Boborás.	Castrelo de Mino.
Carballino.	Chandreja.

Laroco.	La Vega.
Puebla de Trives.	Petin.
Rio S. Juan.	Monterrey.
Teljeira.	Verin.

Núm. 404.

Por Real orden de 7 del actual se crea una plaza de auxiliar con el sueldo de 2,500 rs. anuales, y otra de portero con el de 1,500 rs. anualmente, en cada una de las diez comisiones permanentes de Estadística establecidas en los partidos judiciales de esta provincia, á escepcion del de la capital.

Las personas que se crean adornadas de los requisitos necesarios para su obtencion dirigiran sus solicitudes con los documentos que acrediten sus méritos y servicios, en el término de diez dias, á los señores jueces de primera instancia, presidentes de aquellas y encargados de elevar á mi autoridad la correspondiente propuesta. Orense 12 de Agosto de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria.

Número 405.

En las Gacetas correspondientes á los dias 20 y 21 de Julio y 8 de Agosto, números 1,658, 1,659 y 1,677 se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Subsecretaria.—Negociado 2.º

La Reina (Q. D. G.) se ha dignado expedir el Real decreto siguiente: En los autos y expedientes de competencia, suscitada entre la Audiencia territorial y el Gobernador de la provincia de Burgos; de los cuales resulta:

Que mediando diferencias entre los pueblos de Plagaro y Pajares sobre los límites de sus términos propios y privativos, principalmente en materia de aprovechamiento de pastos, recayó

providencia de la Diputacion provincial de Burgos en 17 de Noviembre de 1855; en la cual, en vista de una reclamacion del Regidor pedáneo de Plagaro, de lo informado por el Ayuntamiento del Valle de Tobalina, á que los dos pueblos pertenecen, y de las concordias presentadas por el de Plagaro, se previno al Regidor pedáneo de Pajares que se abstuviera de introducir los ganados de sus vecinos en la sierra de Plagaro y Villaescusa, toda vez que no habia exhibido documento alguno que lo justificase.

Que en 12 de Febrero del año próximo pasado recurrió el Regidor pedáneo de Pajares á la Diputacion, alzándose de la anterior providencia en cuanto no se limitase á la sierra conocida por de Plagaro y Villaescusa, sino que pudiera creerse aplicable al monte y sierra de Usar, en que afirma tener mancomunidad de pastos los vecinos de Pajares con los de otros pueblos, entre estos los de Plagaro y Villaescusa:

Que pendiente de resolucion esta instancia, y en tal estado las cosas, interpuso en 16 de Junio del mismo año un interdicto el Regidor del Consejo y comun de vecinos de Plagaro, ante el Juez de primera instancia de Villarcayo, en queja de que el pastor de Pajares se habia intrusado con ganados lanar y cabrio el 15 del propio mes en la sierra de Plagaro y Villaescusa, habiendo concurrido en su apoyo los vecinos de Pajares, y proponiéndose á derribar una cabaña construida en este término:

Que sustanciado por el Juez el interdicto, dió en 27 del citado Junio auto restitutorio, que fué notificado en el propio dia, en el cual acudió tambien el Regidor de Pajares con el de Villa nueva del Grillo, como pedáneos y en representacion de sus respectivos pueblos, al Gobernador de la provincia con relacion de todos los antecedentes indicados, sosteniendo que las sierras de Plagaro y Villaescusa y la de Usar eran distintas en sus términos y en las condiciones de sus aprovechamientos, y pidiendo que requiriese de inhibicion á

la Autoridad judicial en el conocimiento del interdicto de que se ha hecho mérito:

Y finalmente, que habiendo interpuesto por separado el mismo Regidor de Pajares en el dia 28 siguiente, apelacion del auto en que habia sido condenado en el interdicto, y remitidos los autos á la Audiencia de Burgos mientras en esta se continuaba el procedimiento, la requirió el Gobernador de inhibicion en 24 de Setiembre último, resultando, despues de llenados los trámites necesarios, la presente enunciancia:

Vistos los artículos 49 y 153 de la ley de 5 de Febrero de 1823, que encarga á los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales el fomento de la agricultura, la industria y el comercio:

Visto el art. 5.º, párrafo sexto de la ley para el gobierno de las provincias de 2 de Abril de 1845, que señala, entre las atribuciones de los Gobernadores, la de suspender, modificar ó revocar, segun lo exijan las circunstancias, y con tal que no se opongan á ello las leyes ó los decretos y órdenes de Gobierno, los actos de las Autoridades, corporaciones y agentes que dependan del Ministerio de la Gobernacion:

Vistos los párrafos primero y sexto del art. 8.º y el art. 9.º de la ley de Consejos provinciales de la misma fecha, que determinan que estos Cuerpos oiran y fallaran las cuestiones contenciosas, relativas al uso y distribucion de los bienes y aprovechamientos provinciales y comunales; al deslinde de los términos correspondientes á pueblos y Ayuntamientos cuando estas cuestiones procedan de una disposicion administrativa, y á todo lo contencioso de los diferentes ramos de la Administracion civil para lo cual no establezcan las leyes Juzgados especiales:

Vista la Real orden de 8 de Mayo de 1839, que no permite á la Autoridad judicial la reforma, por medio de interdicto, de providencias de los Ayuntamientos y Diputaciones provincia-

les en asuntos de su legal atribucion.

Considerando:

1.º Que habiendo mediado la providencia de la Diputacion provincial de Burgos de 17 de Noviembre de 1855, dada en virtud de las facultades que la concedia la ley citada de 3 de Febrero de 1823 entonces vigente, y en materia esencialmente administrativa, como que respondia a deslindes de términos de pueblos y a intereses colectivos de la agricultura, y hallándose pendiente ante la misma corporacion la reclamacion de 25 de Febrero del año próximo pasado contra su providencia indicada, el Regidor y vecinos de Plazaro han debido acudir á la Autoridad y jurisdiccion del orden administrativo para sostener el estado de cosas declarado por aquella providencia, sin recurrir á la Autoridad judicial por la via del interdicto, que excluye en casos tales la Real orden ademas citada de 8 de Mayo de 1859.

2.º Que para que esta Real orden sea exactamente aplicable á la presente competencia; no obsta que el interdicto no tuviera por objeto contrariar la providencia de que se ha hecho mérito, y que la providencia no haya sido contrariada por el fallo del Juez de primera instancia; porque en casos como el de que se trata siempre se corre riesgo de que la resolucion judicial reforme las providencias legalmente administrativas, lo cual pudiera aun suceder al fallarse en apelacion el interdicto, y ha querido evitar la Real orden mencionada;

Oido el Consejo Real, Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administracion.

Dado en Palacio á 15 de Julio de 1857.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernacion, Cándido Nocedal.

De Real orden lo traslado á V. S. con devolucion del expediente y autos á que esta competencia se refiere para su inteligencia y demas efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Julio de 1857.—Nocedal.—Sr. Gobernador de la provincia de Burgos.

La Reina (Q. D. G.) se ha dignado expedir el Real decreto siguiente:

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Burgos y el Juez de primera instancia de su capital; de los cuales resulta:

Que en 11 de Julio del año próximo pasado acudió D. Ciriaco Francos al Juez referido, diciendo que el concejo y vecinos de Villalvar habian venido pagándole, desde tiempo inmemorial, cierto censo perpetuo en Setiembre de cada año, hasta el anterior de 1855 en que no pudo conseguir el pago á pesar de diferentes avisos, y reconvencciones extrajudiciales; por lo cual pedia que se proveyese lo necesario á fin de que los vecinos reunidos en concejo, como lo tenían de costumbre, nombrasen dos representantes que declarasen la verdad de lo expuesto, y que se le entregase luego todo lo actuado para lo que fuera procedente.

Que acordado así por el Juez, los dos apoderados nombrados al efecto por el concejo y vecinos de Villalvar, declararon que aunque ignoraban si por via de censo, señorio ó en otro concepto, era cierto que desde tiempo inmemorial hasta 1855 venia pagando el concejo, por repartimiento vecinal, el canon de que se trata, y que se estaba en la creencia de que no habia obligacion de seguirle pagando, por no haberse avenido D. Ciriaco Francos á exhibir documento alguno que acreditase su derecho.

Que Francos acudió entonces con un escrito, dando por reconocida la

deuda en el hecho de haberse confesado que venia pagándose de inmemorial, y pidiendo que se despachase ejecucion contra todos y cada uno de los vecinos de Villalvar; y habiendo accedido el Juez á lo solicitado, el Ayuntamiento suplicó que se le admitiese la oposicion que hacia á la ejecucion despachada, é interpuso declinatoria de jurisdiccion, fundándose en que la cuestion era administrativa, en virtud de varias disposiciones, entre ellas mi Real decreto de 15 de Marzo de 1847; y en tal estado Francos se opuso á los dos extremos de esta peticion, y reclamó la compulsa de documentos públicos en que aparece que las causantes habian dado á censo perpetuo al concejo de Villalvar diferentes heredades.

Que el Juez circunscribiendo, con calidad de por ahora, la tramitacion del negocio al artículo de declinatoria, desestimó ésta en auto de que interpuso apelacion el Ayuntamiento, que le fué admitida en ambos efectos, recibiendo entonces en el Juzgado un exhorto del Gobernador de la provincia en que, á excitacion del mismo Ayuntamiento y oido el Consejo provincial, requería de inhibicion al juez.

Que este procedió á sustanciar el artículo de competencia, y sostuvo su jurisdiccion, resultando el presente conflicto:

Vista la disposicion 6.ª de mi Real decreto de 4 de Junio de 1847, segun la cual el Jefe politico (hoy Gobernador) que comprendiere pertenecerle el conocimiento de un negocio en que se halle entendiendo un Tribunal ó Juzgado ordinario ó especial, debe requerirle inmediatamente de inhibicion:

Considerando:

1.ª Que con arreglo á la disposicion citada, para provocar los Gobernadores de provincia competencia á la Autoridad judicial, debe mediar el requisito esencial de que el Juez ó Tribunal á que requieran de inhibicion, sea el que esté conociendo del negocio que se reclame:

2.ª Que esta circunstancia no concurre en el caso actual por haber terminado la jurisdiccion del Juez de primera instancia desde el momento en que admitió en ambos efectos la apelacion interpuesta por el Ayuntamiento de Villalvar, por lo cual debió el Juez verificar desde luego la remesa de autos á la Audiencia y poner en conocimiento del Gobernador el estado del asunto para que dirigiese á la misma Audiencia su requerimiento;

Oido mi Consejo Real, vengo en declarar mal formada esta competencia y que no ha lugar á decidirla.

Dado en Palacio á 15 de Julio de 1857.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernacion, Cándido Nocedal.

De Real orden lo traslado á V. S. con devolucion del expediente á que esta competencia se refiere, para su inteligencia y demas efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 16 de Julio de 1857.—Nocedal.—Sr. Gobernador de la provincia de Burgos.

La Reina (Q. D. G.) se ha dignado expedir el Real decreto siguiente:

«En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Sevilla y el Juez de primera instancia de Sanlúcar la Mayor; de los cuales resulta: que habiéndose presentado denuncia ante el referido Juez, expresando que, al verificarse las elecciones generales de Diputados á Cortes en 1855 en la seccion de Aznalcázar, habian aparecido en las listas, como votantes, electores que no concurrieron al acto,

entre los que se designaban á Don José Martin y Don Juan Moreno Mayor, el Juez procedió á instruir sumaria por el delito de falsedad contra el Alcalde presidente y los Secretarios escrutadores de la mesa de la expresada seccion; y para procesar al primero, pidió autorizacion al Gobernador de la provincia; y que el Gobernador, oido el Consejo provincial, requirió al Juez de inhibicion, resultando esta competencia:

Visto el art. 28 de la Constitucion de la Monarquia española, segun el cual, el Congreso decide sobre la legalidad de las elecciones de los Diputados:

Visto el art. 66 de la misma Constitucion, que determina que á los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales:

Visto el art. 3.º, párrafo primero de mi Real decreto de 4 de Junio de 1847, que prohíbe á los Jefes políticos (hoy Gobernadores) suscitar contienda de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administracion, ó cuando, en virtud de la misma ley, debe decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestion previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Considerando:

1.º Que la facultad privativa concedida al Congreso de los Diputados por el art. 28 citado de la Constitucion para decidir sobre la legalidad de las elecciones, no coarta la potestad exclusiva que, á su vez, consigna el art. 66 de la misma Constitucion á los Tribunales ó Juzgados respecto á la represion de toda especie de delitos, sean ó no cometidos en actos electorales; mucho menos en casos como el presente, en que el delito que se persigue no afecta esencialmente á la legalidad ya declarada del acto de que se trata:

2.º Que por lo tanto no hay en el negocio, en el estado en que se encuentra, cuestion previa que pueda detener la accion de los Tribunales; y que no existiendo por otra parte jurisdiccion en la Autoridad administrativa para conocer del delito de falsedad que se persigue, no es llegado ninguno de los casos en que el artículo y párrafo citados de mi Real decreto de 4 de Junio de 1847 permiten á los Gobernadores de provincia suscitar estas contiendas en causas criminales.

Oido mi Consejo Real, Vengo en declarar mal formada esta competencia, y que no ha lugar á decidirla.

Dado en Palacio á 15 de Julio de 1857.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernacion, Cándido Nocedal.

De Real orden lo traslado á V. S. con devolucion del expediente á que esta competencia se refiere, para su inteligencia y demas efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 16 de Julio de 1857.—Nocedal.—Sr. Gobernador de provincia de Sevilla.

MINISTERIO DE FOMENTO.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios, y la Constitucion de la Monarquia española Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y entendieren sabed, que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º Se autoriza al Gobierno de S. M. para otorgar á D. Eliseo Paig

y Valle, como representante de la empresa Jaime Vicente Gomez y compaña, la concesion definitiva de un ferro-carril que, partiendo del criadero carbonifero de Utrillas, en la provincia de Teruel, termine en el rio Ebro y punto de la Zaida.

Art. 2.º Esta concesion se hará con arreglo á los planos, presupuestos, tarifas y relaciones de material que, previos los requisitos que exige la legislacion vigente, apruebe el Gobierno de S. M.

Art. 3.º La concesion será por 99 años y sin subvencion alguna del Estado ni de las provincias, pero con todas las franquicias, privilegios y exenciones que las disposiciones vigentes otorgan á las empresas de ferro-carriles para la construccion y explotacion de los mismos.

Art. 4.º La presente autorizacion no se opone á cualquiera que tenga por objeto la construccion de otra via, que partiendo del mismo criadero vaya á terminar en otro punto del Ebro.

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demas Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á cinco de Agosto de mil ochocientos cincuenta y siete.—YO LA REINA.—Refrendado.—El Ministro de Fomento, Claudio Moyano Samaniego.

Doña Isabel II, por la Gracia de Dios y la Constitucion de la Monarquia española Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y entendieren sabed, que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º Se autoriza al Gobierno de S. M. para otorgar á D. Leon Cappa la concesion definitiva de un ferro-carril, que partiendo del criadero carbonifero de Gargallo, provincia de Teruel, termine en el rio Ebro y punto de Escatron.

Art. 2.º Esta concesion se hará con arreglo á los planos, presupuestos, tarifas y relaciones de material que, previos los requisitos prescritos en la legislacion vigente, apruebe el Gobierno de S. M.

Art. 3.º La concesion será por 99 años y sin subvencion ninguna del Estado ni de las provincias, pero con todas las franquicias, privilegios y exenciones que las disposiciones vigentes otorgan á las empresas de ferro-carriles para la construccion y explotacion de los mismos.

Art. 4.º La presente autorizacion no se opone á cualquiera que tenga por objeto la construccion de otra via que, partiendo del mismo criadero, vaya á terminar en otro punto del Ebro.

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demas Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á cinco de Agosto de mil ochocientos cincuenta y siete.—YO LA REINA.—Refrendado.—El Ministro de Fomento, Claudio Moyano Samaniego.

MINISTERIO DE HACIENDA.

REALES ORDENES

Ilmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) de la informado por la extinguida Junta consultiva de Aranceles en el expediente relativo al modo de regularizar los derechos que deban imponerse á la cera en sus diferentes clases, segun su procedencia y la bandera en que se conduzca, y conformándose con lo propuesto por esa Direccion general, de acuerdo con la Junta de Jefes de Administracion de la misma, se ha dignado mandar:

1.º Que la cera amarilla sin labrar sale de 8,50 reales por arroba en bodega nacional y 10,50 en extranjera o por tierra.

2.º Que la misma, producto y procedente de las posesiones españolas de América, pague 2,10 y 5,10 reales, también por arroba, según bandera.

3.º Que la libra de cera amarilla labrada, incluidas las bujías o velas, satisfaga respectivamente 1,35 y 1,95 rs.

4.º Que la cera blanca sin labrar pague 10 y 12 reales por arroba.

5.º Que la misma, producto y procedente de las posesiones españolas de América, sale de 2,50 y 5,50 rs.

6.º Que la libra de cera blanca labrada, incluidas las bujías o velas, satisfaga 2,65 y 2,75 rs. respectivamente.

Y 7.º Que a la cera en borras, desperdicios u horrasas se le exija 2,50 y 4,50 rs. en libra según su caso.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 29 de Julio de 1857.—Barzanallana.—Sr. Director general de Aduanas y Aranceles.

He dado cuenta a la Reina (q. D. g.) de la comunicacion de V. S. de 27 de Julio último, participando haberse realizado en las Cajas de este Banco los 6 millones de reales que representan el capital social con que debe empezar a funcionar, según lo dispuesto en el art. 5.º del Real decreto de 25 de Abril del presente año; y en su consecuencia, S. M. ha tenido a bien declarar definitivamente constituido el Banco de Zaragoza, puesto que se ha hecho efectivo el referido capital dentro del plazo prefijado en el art. 5.º de la Ley de 28 de Enero de 1856, y se han llenado además por parte de dicho establecimiento todas las prescripciones de la misma.

De Real orden lo digo a V. S. para los efectos correspondientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 1.º de Agosto de 1857.—Barzanallana.—Señor Comisario Régio del Banco de Zaragoza.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 12 de Agosto de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria.

Número 406.

El Sr. Gobernador Militar de esta provincia, con fecha de ayer me dice lo siguiente:

He de merecer a V. S. se sirva disponer sea citado por medio del Boletín oficial de la provincia, el soldado del regimiento infantería de Soria Juan Prieto y Escuredo, a fin de que se presente en la Secretaría de este Gobierno a recoger su licencia absoluta, y a entregar el pasaporte que obra en su poder.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del interesado y efectos que se expresan. Orense Agosto 11 de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria.

ORDENANZAS GENERALES

DE MONTES.

(Continuación.)

191. Los dueños de animales cogidos de día en contravención, serán condenados a una multa de tres rs. por un cerdo, de cuatro por cabeza

lanar, de diez por cabeza caballar, asnal o mular, de catorce por cada cabra, y de diez y seis por cada res vacuna; se doblarán las multas si el monte tuviese menos de diez años; y se atenderá siempre al resarcimiento de daños y perjuicios.

192. En caso de reincidencia serán dobles las multas. Se entiende que hay reincidencia siempre que dentro del año anterior haya sufrido el contraventor un juicio por delito o contravención a lo mandado en estas Ordenanzas.

193. También se doblarán las multas, si el delito se ha cometido de noche, o si los delincuentes se han servido de Sierra u otro artificio que no cause ruido para cortar los árboles.

194. En todo caso en que haya lugar a resarcimiento de daños, la estimación de estos no podrá ser menor que la multa que se impusiere.

195. Las restituciones y el resarcimiento de daños pertenecen a los dueños del monte: las multas y confiscaciones al fondo de penas de cámara.

196. En caso de declararse nulas por fraude o colusión las ventas o remates hechos, el comprador o rematante será condenado, además de las multas prescritas y la indemnización de daños, a restituir las maderas ya beneficiadas, o a pagar su valor al precio de la subasta o venta.

197. Los maridos, padres, madres y tutores serán responsables, no a las multas, pero si a las restituciones, daños y perjuicios, y gastos por los delitos o contravenciones que cometan sus mugeres, hijos menores de edad, y pupilos que viven en su compañía, o por sus obreros, carreteros, u otros criados suyos; quedándoles salvas las repeticiones que se crean con derecho a hacer contra las personas de los dañadores. Todo ello a menos de probar que habian hecho de su parte cuanto el mas diligente pudiera hacer para impedir el delito.

198. Las penas que van señaladas en ciertos casos contra los empleados, dependientes o comisionados de la Direccion general, son independientes de las que estos mismos merecerán por malversacion, colusion o abuso de autoridad. También son independientes de las que merezcan los acusados de soborno para con los mismos empleados, cuyo delito así como cualquier otro no especificado en estas ordenanzas, se castigará según las leyes comunes.

TITULO VII.

Ejecucion de las sentencias.

199. Las sentencias se notificarán o en persona o por cédula a las partes, dentro de los tres dias siguientes a su pronunciamiento, y desde el dia de la notificación correrá el término de la apelación o de la reclamación del que hubiese sido condenado en rebeldía.

200. La recaudación de las multas y confiscaciones se hará por los depositarios de penas de Cámara, a cuyo fin dispondrá el Juez que se les hagan saber las sentencias que contengan tales condenaciones. El comisionado de la Direccion y el Administrador del monte dañado cuidarán de la exacción de las restituciones, gastos, daños y perjuicios que hayan de pagar los delincuentes en los montes que están a cargo de la Direccion general.

201. Toda sentencia condenatoria lleva consigo aparejada ejecución con apremio personal, y este apremio podrá llevarse a efecto a los cinco dias de expedido el mandamiento de pago.

202. Aquellos que dieren lugar al apremio personal, serán puestos en la cárcel hasta que hayan pagado la suma a que fueron condenados, o dieren fiador a satisfacción de los ejecutantes, o si se disputare sobre el abono de la fianza, a juicio del Juez de la causa.

203. Sin embargo, los condenados que justificasen su absoluta insolvencia, podrán ser puestos en libertad despues de quince dias de cárcel; si la multa y demas condenaciones no exceden de sesenta reales vellón: o despues de un mes, si las condenas pasasen de esta suma, sin llegar a doscientos reales; y despues de dos meses sea cualquiera la suma de las condenas. En caso de reincidencia la prision será de doble tiempo.

204. La prision por apremio a estos pagos no se confundirá nunca con la que se impusiere por pena.

205. Lo que se recaudare por restituciones o indemnización de daños y perjuicios, entrará por de pronto en mano del comisionado de la Direccion, quien entregará inmediatamente lo que corresponda a los interesados recogiendo sus recibos.

206. El comisionado de la Direccion llevará un registro puntual de todas las denuncias y juicios consiguientes a ellas, que ocurrieren en su comarca, y en el mes de Diciembre de cada año enviará un estado puntual de ellas al Comisario del distrito, con expresion de las sentencias dadas y ejecutadas, y del estado de las que estuvieren todavía pendientes.

TITULO VIII.

Aplicaciones de los tres titulos anteriores a los montes de dominio particular.

207. Los dueños de montes no encargados a la Direccion general, si los tuviesen contiguos a estos, podrán, si quieren, ponerlos bajo la defensa y custodia del comisionado y de los guardas de la Direccion en la respectiva comarca de distrito, contribuyendo a prorata de la extension de sus montes a los gastos comunes de la defensa y guarda.

La admision del que así lo pretendiere, y el arreglo de su cuota de contribucion, se hará por la Direccion general a propuesta bien informada del Comisario principal del distrito.

208. Las denuncias y causas en los montes que se pusieren en este caso, se seguirán hasta la ejecución de las sentencias, del mismo modo que las de los encomendados a la Direccion general.

209. Los dueños particulares de montes que no estuvieren bajo la guarda y defensa de la Direccion general, podrán poner los guardas que quisieren en sus montes; mas no podrán estos guardas proceder a las detenciones, embargos, y denuncias en la forma explicada en los artículos 102 y siguientes de estas Ordenanzas, si no hubiesen sido presentados al Juzgado Real del territorio, y hubiesen prestado ante él el juramento correspondiente.

Las denuncias de los así juramentados harán fé mientras no hubiese prueba en contrario. Pero ellos y

sus principales serán responsables de los gastos, daños y perjuicios que resultaren al denunciado, si se declarase infundada la denuncia.

210. Las denuncias o quejas de los dueños particulares de montes que no estuviesen admitidos bajo la guarda y defensa de la Direccion general, contra los dañadores, se seguirán ante los Jueces y en la forma establecida para los demás delitos y daños de campo de la jurisdiccion donde están sitos aquellos.

211. Los Jueces de estas causas las fallarán en cuanto a las penas y aplicación y exacción de ellas, con arreglo a lo dispuesto por estas Ordenanzas.

TITULO IX.

Disposiciones excepcionales.

212. Se mantienen exceptuados de las reglas generales de estas Ordenanzas.

1.º Los bosques de mis Reales Sitios u otros incluidos en Mi Real Patrimonio, los cuales se regirán bajo las reglas y jurisdiccion que tengo establecidas o estableciere acerca de ellos.

2.º Los que por pertenecer a los Infantes y miembros de Mi Real familia se rigen por reglas y jurisdiccion particular por Mi establecidas.

3.º Los montes de mis dominios de Ultramar, incluidas las Islas Canarias y Baleares, sobre los cuales previene a su tiempo lo mas conveniente.

4.º Los de las tres provincias exentas, Vizcaya, Alava y Guipúzcoa continuarán rigiéndose por sus Ordenanzas particulares que están aprobadas por Real autoridad; pero en cuanto necesitaren de Mi Real proteccion, sea para el mejor cumplimiento de sus Ordenanzas, sea para variar o modificar alguna de ellas, encaminarán sus solicitudes por la Direccion general de montes.

213. En los montes en que el Estado, los pueblos o los establecimientos públicos tienen condominio con otros particulares, podrán estos proponer a la Direccion las cortas, beneficios o ventas que crean oportunas en el monte comun; serán citados y podrán asistir a todas las operaciones de corta y venta, y demás importantes al mayor provecho del monte.

Los gastos de deslindes, amojonamientos, guarda, medicion y demás se prorratearán también entre los condóminos, así como se repartirán las restituciones, resarcimientos de daños, y los productos de cualquier género que tuviere el monte.

(Se continuará.)

SEPTIMA SECCION.

Juzgado de primera instancia del Carballino.

El licenciado don Jacinto Taboada, juez interino de primera instancia de este partido judicial de Carballino.

Por el presente llamo, cito y emplazo a don Ramon Lopez, guarda del ramo que fué de este partido judicial, a fin de que se presente en este juzgado y escribania del originario dentro del término de treinta dias que principiarán a correr desde que tenga efecto la insercion de este anuncio en los periódicos oficiales, para ser ratificado en la declaración que prestó ante la comisaria de montes, en causa que contra él se in-

truye por abusos cometidos en el monte del Estado que radica en la parroquia de Carballada, alcaldía de Piñor. Y a fin de que tenga efecto su presentación, ruego a todas las autoridades, tanto civiles como militares, que en cualquier punto en que fuere hallado, se sirvan remitirlo a este juzgado con las debidas precauciones, cuyo individuo tiene las señas personales siguientes:

Señas.

Edad 40 años, estatura 5 pies, pelo y ojos negros, nariz regular, barba poca, cara larga, color moreno; vestía pantalón de paño rayado, chaqueta idem negra, chaleco idem idem, sombrero blanco chato de ala larga.

Señas particulares.

Tartamudo y algo cargado de espaldas.

Dado en Carballino a 2 de Agosto de 1857. — *Jucinto Taboada.* — Por su mandado, *Agustín Pereira.*

IDEM.

En los autos promovidos por Andrea Vieitez, vecina de Boborás en este partido judicial, contra su marido José Sánchez y acreedores de este, a consecuencia de tercera dotal, por el señor juez de primera instancia interino de dicho partido, se ha dictado la sentencia de este tenor. — En la villa de Carballino, a 31 días del mes de Julio, año de 1857. Don Andrés Pazo, juez accidental de primera instancia en este asunto, de acuerdo con el asesor que suscribe, por ante mí, escribano dijo: Vistos los autos seguidos a instancia de Andrea Vieitez, vecina de Boborás, mujer de José Sánchez, contra este y sus acreedores Rafael González de Arcos, Doña Agustina Loureiro de Lajas y Felipe Rodríguez, de Mesigo a consecuencia de tercera dotal. Resultando que Andrea Vieitez en 9 de Octubre de 56 produjo solicitud de que se le declarase opuesta a las ejecuciones entabladas contra su marido por el González y la Loureiro como tercera escluyente de dominio y reintegro preferente, y en definitiva se hiciesen las declaraciones procedentes en derecho. Resultando que citados y emplazados en forma los demandados nada objetaron a la demanda, antes bien se apartaron de toda gestión según aparece de las diligencias a folios 5, 6, 7 y 8. Resultando que Andrea Vieitez aportó al matrimonio con José Sánchez los bienes de los memoriales primero y segundo, unos por dote y otros por herencia, según informes, declarando los 3 testigos de la prueba dada en su nombre por el procurador Alfeirau, y consta de la causa dotal compulsada, al folio 18 y siguientes. Resultando de la misma prueba que José Sánchez enagajó a diferentes sujetos a títulos de ventas las partidas del segundo memorial, empero de que los testigos no fijan el precio en que consistieron aquellas. Resultando que ni Sánchez ni los demás impugnaron ser pertenencia del primero los bienes del tercer memorial que acompañó a la demanda. Considerando que la mujer casada no responde de las deudas contraídas en la sociedad conyugal, renunciando los gananciales de la misma, y por consiguiente no pueden realizarse en los bienes de su dote y capital. Considerando que según esta disposición terminante de la ley nueve, título cuarto, libro diez de la novísima recopilación, los bienes de la demandante no están sujetos al pago de los créditos de su marido, sin embargo de haberse contraído durante matrimonio. Considerando que consintiendo la dote y capital de la mujer en bienes inapreciables, debe el marido restituir los mis-

mos que recibió disuelto el matrimonio; que por esta razón y otras de elevado interés, no puede enagenarlos sin consentimiento de aquella, y en otro caso el importe de los enagajados, es reintegrable en sus bienes con preferencia a otros créditos, mediante el privilegio que por derecho goza el de la mujer. Considerando, que por insolvencia del marido está autorizada la mujer para reivindicar de los compradores los bienes de su dote y capital vendidos por aquel. Por todo ello, fallo, que debo declarar y declaro bienes dotal y capitales de Andrea Vieitez los comprendidos en los memoriales primero y segundo que encabezan su demanda, y exentos los del primero de las ejecuciones entabladas contra su marido por Rafael González y Doña Agustina Loureiro como de cualesquiera otras. Debo así bien mandar y mando que del valor de los del segundo memorial se reintegre a la misma en los del tercero con preferencia a dichos acreedores y Felipe Rodríguez a justa regulación de peritos electos en la forma ordinaria, reservándola su derecho en razón del déficit que resulte para que lo ejercite como y donde viere convenirle; como igualmente el de que estén asistidos los expresados acreedores para que agiten la reclamación de sus respectivos créditos ante quien corresponda. Por esta mi sentencia definitivamente juzgando, con imposición de las costas de este procedimiento, así lo determino, mando y firmo Andrés Pazo. — Asesor Licenciado, José María Nogueira. Y en ausencia y rebeldía de los acreedores y mas interesados no apersonados é ignorados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.190 de la ley se espide el presente en Carballino a 4 de Agosto de 1857. — *Andrés Pazo.* — De orden de dicho señor, *Bernardo José Alonso.*

Idem de Bande.

Don José Domingo Llera, Juez de primera instancia del partido de Bande en la provincia de Orense.

Por el presente cito, llamo y emplazo a Teresa Perez del Mato do Padrenda, para que dentro del término de treinta días se presente en la cárcel pública de este mi juzgado a responder a los cargos que contra ella resultan en la causa que me hallo instruyendo sobre el envenenamiento de Josefa Salgado y muerte de la misma, que se le oirá y guardará justicia en lo que la tenga; bajo apercibimiento que pasado dicho término sin hacerlo, seguirá la causa su curso en su rebeldía y los autos y diligencias a ella tocantes, se sustanciarán y entenderán con los estrados de este mi referido juzgado, y le pararán el mismo perjuicio que si fueren en su persona, sin mas citale ni emplazarle, pues lo hago por el presente en forma. Dado y firmado en Bande autorizado del ordinario a 7 de Agosto de 1857. — *José Domingo Llera.* — D. S. O., *Manuel Álvarez.*

Idem de Padron.

Don Felipe Viñas, juez de primera instancia en la villa y partido del Padron.

Por este tercer edicto cito, llamo y emplazo a Manuel Mella, vecino de la calle de los Lagartos en la ciudad de Santiago, para que dentro de nueve días, contados desde su inserción en el Boletín de las cuatro provincias, se presente en la cárcel de este juzgado a responder a los cargos que contra él

resultan en la causa que al mismo y otros esloy formando sobre hurto de maíz en un canasto de Benito Tato, vecino de la parroquia de Santa Marina de Luci; apercibido que de no verificarlo, pasado que sea dicho término, seguirá la causa en su rebeldía y le pararán perjuicio todas las actuaciones, como si estuviera presente. Dado en la villa del Padron a 23 de Julio de 1857. — *Felipe Viñas.* — Por su mandado, *Tomás Barreiro.*

Idem de Lugo.

Don José María Ulloa, auditor honorario de guerra, juez de primera instancia del partido a que da nombre esta capital.

Llamo, cito y emplazo a Juan Perez Fernandez natural de la parroquia de S. Salvador de Lorenzana, fugado de la cárcel de la villa de Ríos en el partido judicial de Verin al ser conducido por la Guardia Civil al presidio de la carretera de Vigo, para que dentro del término legal acuda a sostener su derecho ante S. E. los Sres. de la Real Audiencia de la Coruña en la causa que se le formó y se remite allí fallada, sobre resistencia con violencia é intimidación a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, advertido que de no verificarlo se le elijirán de oficio letrado y procurador, que se encarguen de su representación y defensa, y con este se entenderán cuantas diligencias ocurran hasta que recaiga sentencia firme y ejecutoria, y le ostarán como si lo fueran en su propia persona. Dado en Lugo a 6 de Agosto de 1857. — *José María Ulloa.* — Por mandado de S. S., *José Pereira.*

Idem de Chantada.

Don Ignacio Diaz Rivera, abogado de los tribunales nacionales y juez de primera instancia interino por ausencia del propietario en la villa de Chantada y su partido, etc.

Por el presente cito, llamo y emplazo a Simón Lopez, de la parroquia de San Julian do Campo, distrito de Taboada en este dicho partido, para que dentro del término de treinta días se presente en la cárcel de esta villa a responder a los cargos que le resultan en la causa que contra él instruyo, sobre lesiones causadas a Francisco Moreira de la misma parroquia, que si así lo hiciere se le oirá y hará justicia, y en otro caso se seguirá en su rebeldía y las diligencias a él relativas se practicarán en estrados, causándole el mismo perjuicio que si fueran en su persona. Ruego a las autoridades así civiles como militares, se sirvan prestar el auxilio necesario para el arresto de dicho sujeto, cuyas señas a continuación se expresan, y siendo habido di'pouer sea remitido a este juzgado con seguridad. Dado en Chantada a 1.º de Agosto de 1857. — *Ignacio Diaz Rivera.* — De su mandado, *José Gomez de Castro.*

Señales de Simón Lopez.

Edad 30 años, estatura 5 pies, pelo castaño oscuro, barba poca, ojos castaños, nariz regular, color bueno; viste sombrero portugués ó de paja, pantalón primavera, chaqueta moleton portuguesa.

Juzgado de paz de Oimbra.

Don Francisco Alonso, vecino del pueblo de las Chás, ha recorrido a mi autoridad con una instancia, manifestándome ser pagador en dicho pueblo al Sr. Conde de Monterrey de 50 terrados de centeno anuales, foral titulado de Picotos, en una renta ó paga son también comprendidos muchos mas terratenientes de la Alcadia, y aun forasteros; que se halla sumamente agraviado por cargarsele mas contribucion que la que le corresponde satisfacer, que es conveniente y preciso, se reuniesen los vecinos y forasteros para aclarar esta renta por medio de un Perito ó Peritos que nombrasen amistosamente procediendo a su prorrateo y rebaja de la contribucion; conociendo pues, que esta exposicion es justa a la par que muy equitativa, tanto a los vecinos como a los contribuyentes forasteros, la he admitido, con mayor razon visto el Real decreto de 18 de Abril último inserto en el Boletín oficial núm. 55 acordando anunciarlo en el mismo para conocimiento de los pagadores y del Perito ó Peritos que quieran asomarse a realizar esta operacion, señalándose para ello el día 15 del mes de Agosto venidero y hora de 10 de su mañana en dicho pueblo de las Chás, rogando a los referidos contribuyentes que por su propio bien concurren a hacer esta acta amistosa en el día y hora marcada. Oimbra Julio 28 de 1857. — *Miguel Prada.* — Por su mandado, *Miguel Perez.* Secretario.

SECCION GENERAL.

Don Primo de Novoa Varela, caballero de la Real y Militar orden de San Fernando de primera clase y teniente del batallón provincial de Orense número 15.

Habiéndose ausentado de esta plaza el quinto del actual reemplazo José Barrios Valero, a quien esloy princiando por el delito de primera desercion, y usando de la jurisdiccion que S. M. la Reina tiene concedida en estos casos por sus Reales ordenanzas a los oficiales de su ejército, por el presente llamo, cito y emplazo por segundo edicto a dicho José Barrios, señalándole el cuartel de San Francisco de esta ciudad, donde deberá presentarse personalmente dentro del término de veinte días, que se cuentan desde el día de la fecha a dar sus descargos y defensas; y de no comparecer en el referido plazo seguirá la causa y se sentenciará en rebeldía con arreglo a ordenanza, sin mas llamarle ni emplazarle por ser así la voluntad de S. M.; y al efecto insértese este edicto en los Boletines oficiales de las cuatro provincias de Galicia para que llegue a noticia de todos. Dado en Orense a 4 de Agosto de 1857. — *Primo Novoa.* — Por su mandado, *Franco Rodríguez.*

SECCION DE ANUNCIOS.

DE VIGO PARA RIO-JANEIRO.

El 30. del presente mes de Agosto saldrá la hermosa Fragata Brasileña

admitiendo pasajeros a pagar en Vigo y Rio-Janeiro, para los cuales tiene comodidades y su capitán ofrece buen trato. Los precios de pasaje son bastante arreglados y los que deseen aprovechar esta ocasion pueden dirigirse pidiendo las noticias que deseen a su consignatario en Vigo, calle de la Gamboa, N.º 11. *Norberto Velazquez Coppa.*

ORENSE. — 1857.

PEDRO LOZANO.

IMPRESA DEL BOLETIN OFICIAL.

Calle de S. Pedro, núm. 14.